

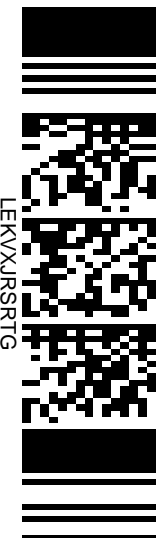
Santiago, siete de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

En estos autos RIT N° 112-2023, RUC N° 1701183697-6 del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad, por sentencia de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, los magistrados don Eduardo Gallardo Frías, doña Carolina Palacios Vera y doña Marianne Barrios Socias, en lo pertinente decidieron:

- I. CONDENAR a CRISTIÁN MAURICIO ORTEGA GONZÁLEZ, cédula de identidad N° 15.822.291-4, como autor del delito de homicidio simple, en grado consumado, a sufrir la pena de DIEZ AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, perpetrado el 29 de septiembre de 2022, en la comuna de Renca.
- II. En atención a lo dispuesto en la Ley N° 18.216 la pena corporal impuesta a Ortega González deberá ser cumplida de manera efectiva, sirviéndole de abono el tiempo que ha permanecido sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva con motivo de esta causa, entre el 29 de septiembre de 2022 al 17 de julio de 2023 (292 días), más el tiempo que ha permanecido sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total entre el 18 de julio de 2023 al 21 de agosto de 2023 (35 días), lo que hace un total de 327 días (trescientos veintisiete días), de acuerdo a lo certificado por el Jefe de Unidad de Causas del tribunal.
- III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, procédase a incorporar la huella genética de Cristian Ortega González en el registro de condenados, previa toma de muestras biológicas.
- IV. Se exime a los sentenciados del pago de las costas de la causa.

En contra de esta decisión, la defensa de Cristián Mauricio Ortega González dedujo recurso de nulidad fundado en lo previsto en el artículo 373 a) del Código Procesal Penal, la que la Corte Suprema recondujo a la contemplada en el artículo 374 letra f) del Código Procesal Penal. Asimismo, como causal subsidiaria impetró la contemplada en el artículo 374 letra f) del



Código Procesal Penal en relación con el artículo 341 del mentado cuerpo legal-. Por último, como segunda causal subsidiaria se impetró la prevista en el artículo 374 letra e) en relación con los artículos 342 letra c) y el artículo 297, todos del Código Procesal Penal-.

En relación a dichos acápites solicita se anule el juicio oral y la sentencia, disponiéndose realizar una nueva audiencia de juicio oral ante tribunal no inhabilitado.

CONSIDERANDO:

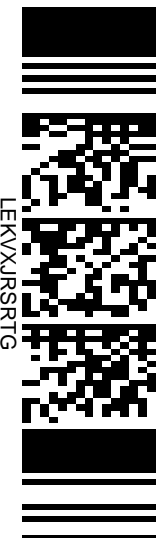
I.- Causal principal fundada en el artículo 374 letra f) en relación con lo previsto en el artículo 341 del Código Procesal Penal:

PRIMERO: Se invoca en el presente recurso de nulidad, como causal principal, la prevista en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, la que fue reconducida por la Corte Suprema en los términos explicitados con antelación. Además, se interpone como segunda causal, en subsidio de la causal principal -para el evento que ella no sea acogida-, la prevista en el artículo 374 letra f) del Código Procesal Penal, esto es, *“cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción de lo prescrito en el artículo ‘341”*.

Señala que los hechos por los que acuso el Ministerio Público, se encuentran contenidos en el considerando primero de la sentencia recurrida. Por su parte, los presupuestos fácticos tenidos por ciertos por los sentenciadores se encuentran consignados en la motivación décimo cuarta de la resolución recurrida.

Manifiesta que, si bien existe una correspondencia formal entre el hecho acusado y aquel condenado en la sentencia, el vicio se materializa en los considerandos décimo cuarto y décimo quinto, en los que el tribunal desarrolla sus razones para señalar como llegan a decisión de condenar a su defendido, tomando elementos que no fueron expuestos en juicio, y agregándolos en este desarrollo.

Explica que la defensa entiende la infracción al principio de congruencia en esta sentencia, no de manera meramente formal -en el sentido que los hechos acusados y los que fuere condenados sean diversos-, sino que es una infracción en el fondo, que influye en el razonamiento del tribunal en cuanto se valoran y agregan elementos no contenidos en la acusación, lo que evidentemente genera una vulneración del debido proceso en su faz de legalidad, por cuanto se incumple la norma del artículo 341 del Código Procesal Penal, lo que a su vez redundará en una infracción al debido proceso en su faz del derecho a defensa.



Precisa que como se advierte de las motivaciones décimo cuarta y décimo quinta, el tribunal al sustentar su argumentación, agrega elementos que no fueron discutidos en el juicio oral, toda vez que se refiere a los cortopunzantes -es decir en plural-, lo que es erróneo ya que a lo largo del juicio solo se tuvo a la vista y se presentaron pruebas respecto de uno, en base al cual se centró la discusión. Explica que el vicio del tribunal, descansa en crear nuevos elementos no comprendidos en la acusación, como es el establecer que la participación de ambos imputados, se desprende en la parte final del artículo 15 N° 1 del Código Penal, en donde se busca enmarcar los hechos en que ambos imputados participaron y la acción de herir a la víctima en base a que por las múltiples lesiones, se infiere que hay más de un arma, cuestión que nunca fue descrita en la acusación, ni planteada por el fiscal en su alegato de clausura, sino que por el contrario habla de que se usó una misma arma por ambos imputados. Explica que, el tribunal frente a la desatención del ente persecutor en cuanto al hecho que buscaba atribuirle a su defendido, construye una situación fáctica que no fue sometida a su juzgamiento.

Refiere que, la defensa se ve sorprendida durante la dictación de la sentencia, al percatarse que el tribunal condena basándose en una forma de participación no descrita respecto de su defendido, cual es que el mismo participa del hecho directamente con un arma que nunca se discutió en juicio y que no tuvo corroboración probatoria, según la prueba expuesta en juicio que habla solo de un arma, incluso que fue incorporada mediante el NUE y fotografías.

Expresa que, conforme a lo explicado los sentenciadores sobrepasaron la descripción fáctica hecha por la acusación, de manera que se tuvieron por acreditados hechos en base a elementos no contenidos expresamente en la imputación fiscal, vulnerando el “principio de congruencia” y perjudicando el derecho a la defensa del imputado ya que el tribunal condenó a su defendido por una forma de participación no descrita en la acusación, que se crea durante el juicio en base a prueba exhibida en el mismo, que conllevó a que se dictara un veredicto condenatorio en contra de su representado, por lo que aquél debió de ser absuelto.

Sostiene que esta infracción causó un perjuicio al imputado que sólo se subsana con la declaración de nulidad de la sentencia y el juicio oral.

Solicita que se acoja el recurso de nulidad, se invalide el juicio oral y la sentencia definitiva recaída en él y se ordene la realización de un nuevo juicio oral, por tribunal no inhabilitado.



SEGUNDO: Que conforme al motivo absoluto de nulidad impetrada por la defensa, prevista en el artículo 374 letra f) del Código Procesal Penal en relación con el artículo 341 del mismo cuerpo legal -*“Cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción de lo prescrito en el artículo 341”*- es dable tener presente que los presupuestos fácticos por los cuales se formuló acusación dicen relación con que:

“El día 29 de septiembre del año 2022 a las 19.00 horas aproximadamente la víctima Gabriel Antonio Pasten Minchillanca, se encontraba en un dormitorio del inmueble ubicado en pasaje 1 número 1271, block 11 departamento 26, en la comuna de Renca. Hasta esta habitación llegaron los acusados JOSHUA EDUARDO NÚÑEZ ORTEGA y CRISTIAN MAURICIO ORTEGA GONZÁLEZ, ambos premunidos de un cuchillo, proceden a agredir a la víctima con este elemento en reiteradas ocasiones, provocándole heridas cortopunzantes penetrantes en miembros inferiores con compromiso vascular, que más tarde le provocarían la muerte al interior del hospital Félix Bulnes”.

La Fiscalía sostuvo que los hechos referidos configuran el delito de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Pena, en grado de consumado, atribuyéndole a los acusados participación en calidad de autores, en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal.

Es así como en la motivación décimo cuarta se señala como supuesto fáctico tenido por cierto que: *“el día 29 de septiembre del año 2022 a las 19.00 horas aproximadamente Gabriel Antonio Pasten Minchillanca, se encontraba en un dormitorio del inmueble ubicado en pasaje 1 número 1271, block 11 departamento 26, en la comuna de Renca.*

Hasta esta habitación llegaron Joshua Eduardo Núñez Ortega y Cristian Mauricio Ortega González, ambos premunidos de un cuchillo, proceden a agredir a Pasten Minchillanca con este elemento en reiteradas ocasiones, provocándole heridas cortopunzantes penetrantes en miembros inferiores con compromiso vascular, que más tarde le provocarían la muerte al interior del hospital Félix Bulnes.

Tal como se indicó los hechos referidos se subsumen en el tipo penal homicidio simple, tal como se pasará a desarrollar

Para efectos metodológicos es preciso tener en cuenta que la atribución de responsabilidad por el delito de homicidio supone un análisis categorial por niveles y subniveles a efectos de constatar la presencia de todos los elementos de la teoría del delito. En el caso de la tipicidad objetiva de este de delito el análisis comienza por verificar la presencia de una



conducta típica que ex ante crea un riesgo jurídicamente desaprobado apto para lesionar o poner en riesgo el bien jurídico de la vida humana.

En segundo lugar ha de constatarse la presencia de un resultado consistente en la muerte de la víctima, el que en este caso se concretó. En tercer lugar debe concurrir una relación de causalidad entre el comportamiento típico y el resultado de muerte, vale decir conforme a la teoría de la equivalencia de las condiciones y en particular el método de la supresión mental hipotética, la conducta debe ser la causa de la muerte. Por último ha de comprobarse que fue el riesgo creado por la conducta típica y no otro el que se materializó el resultado lesivo, esto es, aquello que la doctrina denomina imputación objetiva del resultado o relación de riesgos. Luego en el análisis de la imputación subjetiva debe ser necesario poder atribuir dolo o imprudencia, conforme al principio de culpabilidad, en el caso concreto ha de ser posible atribuir dolo entendido como el conocimiento del riesgo jurídicamente desaprobado. En la especie, resulta evidente que los acusadores han imputado un homicidio doloso.

En cuanto al primero de los elementos antes señalados, es decir la conducta típica, no existe duda en cuanto a que acometer con armas blancas a una persona que estaba sentada encima de una cama genera un riesgo relevante. No se debe olvidar que el baremo conforme al cual ha de analizarse la conducta típica es el del hombre medio puesto en el lugar del sujeto al momento de ejecutar dicho comportamiento con los conocimientos generales y especiales que concurren en ese momento y lugar.

Por otra parte, no se encuentra discutido que a partir de estos hechos la víctima Gabriel Pasten resultó con lesiones en sus extremidades inferiores; diez.- como lo indicó la perito Bustos Baquerizo.- o 5.- según lo expuesto por el médico del Servicio Médico Legal Mauricio Silva, que practicó la autopsia en dependencias del Servicio Médico Legal, siendo ambos contestes en que una lesión fue la principal y atravesó el muslo izquierdo, la arteria femoral y vena femoral, de 6 cm de profundidad, que le provocaron la muerte a las 21:04 horas a causa de un shock hipovolémico, todo lo cual quedó asentado en el DAU del Hospital Félix Bulnes y posteriormente consignado en el certificado de defunción emitido por el Registro Civil e Identificación.

Así, siguiendo con el análisis del tipo objetivo es necesario comprobar la concurrencia de la imputación objetiva del resultado o relación de riesgos, vale decir, debemos estar en situación de asegurar que fue el riesgo creado por la conducta típica y no otro el que luego se materializó en el resultado lesivo. En el caso de marras, dicho elemento se encuentra claramente



establecido, toda vez que es perfectamente posible precisar cuál era la conducta ajustada a derecho que debían realizar los agentes, por cuanto no resulta esperable que en horas de la tarde y pese a la discusión que tenía Katherine con Gabriel, hayan acometido a la víctima de manera simultánea con elementos aptos para causar lesiones de carácter vital, pese a que el occiso se encontraba sentado encima de la cama y en estado de ebriedad, tal como lo constató el informe de alcoholemia¹ 3 SCLOH18643-22 que arrojó un resultado de 1.28 gramos por litros de alcohol en la sangre de Gabriel Pasten, por lo demás se condice con el conocimiento del riesgo del peligro concreto al referirnos a la imputación subjetiva a título de dolo.

Además, se acreditó que la muerte de Gabriel Pasten fue provocada por la acción de un tercero, tal como lo explicaron los peritos José Ormazabal Correa, Mauricio Silva y Vivian Bustos y en lo pertinente describieron que la lesión principal que tenía el cadáver era de carácter vital y necesariamente mortal por cuanto atravesó la arteria y vena femoral, lo que provocó un shock hipovolémico.

Asimismo, conforme al relato vertido por Katherine Ortega, María Minchillanca, Marta González, el cabo José Lara junto con las fotografías se pudo conocer el lugar donde se cometió el delito, a saber, el inmueble ubicado en pasaje 1 número 1271, block 11 departamento 26, en la comuna de Renca, como también observar una gran cantidad de manchas de sangre en el colchón donde el afectado fue agredido por Joshua Núñez y Cristian Ortega.

En conclusión y tal como lo consignó el doctor Silva, quedó demostrado en forma indubitada que la víctima murió a consecuencia de una lesión corto punzante en la cara anterior del muslo izquierdo de 3 cm de largo y 6 cm de profundidad, que penetró la extremidad, transfixian el cuádriceps y lesionó la arteria femoral izquierda y la vena femoral izquierda causando infiltración sanguínea, concluyendo que la causa de muerte es shock hipovolémico, tal como se consignó en el certificado de defunción incorporado por el persecutor y fue accionada por terceros, conforme a lo expresado por la perito Bustos Baquerizo, configurándose de esta forma el tipo penal de homicidio simple previsto en el citado 392 N° 1 del Código Punitivo”.

Por su parte, en el considerando décimo quinto se indica: “Que asimismo, la prueba documental, pericial y testifical rendida, permiten adquirir la convicción, más allá de toda duda razonable que el día 29 de septiembre de 2022 al interior del departamento 26 Block N° 11 N° 1271, de pasaje Uno, comuna de Renca Joshua Núñez y Cristian Ortega, premunidos



de elementos cortopunzante propinaron diversas lesiones a Gabriel Pasten, una de las cuales atravesó el muslo izquierdo, ocasionándole la muerte a las 21:04 horas, a causa de un shock hipovolémico, debido a que la herida cortopunzante atravesó la vena y arteria femoral, estableciéndose que la lesión es de tipo homicida, lesión vital y necesariamente mortal, siendo los acusados quienes en todo momento detentaron el dominio del hecho y por tanto determinaron la acción típica de modo completo, tomando parte en la ejecución del homicidio causado de una manera directa e inmediata, en los términos del artículo 15 N° 1 del Código del ramo.

En tal sentido, cabe señalar que la imputación penal a título de coautoría exige demostrar que en la especie los acusados ejecutaron conjuntamente y de mutuo acuerdo, expreso o tácito el hecho, dividiéndose su realización, en términos tales que dispusieron del codominio del hecho, sobre cuya consumación decidieron en conjunto, porque cada una de las contribuciones, separadamente consideradas, fue funcional a la ejecución del hecho en su totalidad (Cury, Derecho Penal, Parte General, Ediciones de la Universidad Católica de Chile, 2005, p. 610).

Al respecto, hay que considerar que en la coautoría existe un dominio funcional, porque los autores se reparten la realización del hecho, se “dividen el trabajo”, lo que hace posible el delito, lo facilita o disminuye sustancialmente el riesgo del hecho (Jescheck y Weigend, Tratado de Derecho penal, parte general, Editorial Comares, 2002, p. 726), de manera que ninguno de los coautores dispone de su total realización, sino que lo cometen entre todos, por lo que no opera el principio de accesoriedad limitada, propio de la participación criminal.

La coautoría tiene un contenido de injusto propio que deriva del codominio del hecho por parte de los sujetos activos, que intervienen en un hecho propio ejecutando un aporte funcional a la realización mancomunada o colectiva del plan en su conjunto. Así, rige el principio de imputación recíproca, conforme al cual, todo lo que hace cada uno de los coautores dentro del marco del acuerdo de voluntades, le es imputable a los demás.

En efecto, conforme a dicho principio, de todas las aportaciones al hecho realizadas en el marco de la resolución delictiva común, no se trata que el coautor coopera en un hecho ajeno, sino que jurídicamente todas las aportaciones de los coautores son consideradas equivalentes y son imputadas en su totalidad a cada uno de ellos.

En cuanto a la estructura típica de la coautoría, cada uno de los coautores tiene en sus manos el dominio del hecho a través de la parte que



le corresponde en la división del trabajo. De esta forma, el tipo objetivo de coautoría requiere la prestación de una contribución objetiva que sea funcional a la realización del hecho común y el tipo subjetivo, en cambio, requiere la existencia de un acuerdo de voluntades o decisión común al hecho.

En el caso de marras, se ha estimado probable que la versión entregada en un primer momento por la testigo que presenció in situ la agresión de parte de los acusados hacia Gabriel Pasten son aquellas que se corresponden con lo realmente sucedido, esto es, que existió una acción mancomunada de dos de sujetos, a saber, Joshua Núñez y Cristian Ortega que actuaron de manera coordinada ingresando intempestivamente al lugar donde se encontraban el afectado y Katherine Ortega, para luego y sin mediar agresión alguna de parte del occiso, atacarlo en la zona de las extremidades inferiores con cuchillos, causándole diversas lesiones, que le provocaron sangramiento inmediato, tal como lo consignó la perito Vivian Bustos, lo que permite colegir que se produce una actividad de los encartados ligada funcionalmente en orden a consumir una agresión en contra de aquella víctima con elementos aptos para causar su muerte.

En resumen, con los elementos de juicio pormenorizados precedentemente, este Tribunal se ha convencido más allá de toda duda razonable de la participación en calidad de coautores del delitos de homicidio simple, que les cupo a los acusados Ortega y Núñez, en la medida que corresponden a la ejecución directa del hecho en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal”.

TERCERO: Que de la lectura y análisis de los presupuestos fácticos consignados en el considerando que precede, se deja en evidencia que los magistrados del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago actuaron en la dictación de una sentencia condenatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 340 del Código Procesal Penal, en el sentido que *“Nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el Tribunal que lo juzgare adquiere, más allá de toda duda razonable la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley.*

El Tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral”.

En efecto, la sentencia condenatoria se sustentó en el material probatorio rendido por el acusador fiscal, en cuanto a la acreditación de los supuestos fácticos contenidos en la acusación, respecto de las



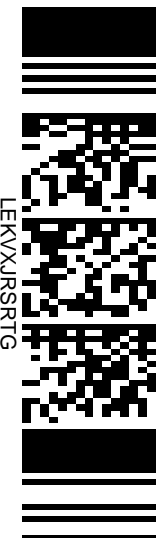
circunstancias de tiempo y lugar, como asimismo la descripción de las imputaciones precisas efectuadas en relación al encartado y la acción que éste habría llevado a cabo, todo ello con el objeto de vencer el estado de inocencia que favorece a toda persona imputada y convencer al Tribunal, más allá de toda duda razonable, que se ha cometido el hecho punible descrito y que en él ha correspondido al imputado una participación culpable y penada por la ley, respetándose lo dispuesto en el artículo 341 del Código Procesal Penal, esto es, que la sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación.

De esta forma, la exigencia legal de congruencia constituye un reflejo del derecho de defensa, en cuanto se requiere que la imputación sea precisa y determinada y por lo tanto conocer exactamente cuáles son los hechos que se le atribuyen, sus circunstancias de comisión -cuándo y dónde habría ocurrido- y la calificación de los mismos. De esta forma, el artículo 341 del Código Procesal Penal impide condenar por hechos o circunstancias no contenidos en la acusación.

Por su parte en los artículos 8 número 2 del Pacto de San José de Costa Rica, 14 N ° 3 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8, inciso primero del Código indicado precedentemente, requieren, necesariamente, que el acusado conozca con antelación los hechos que se le imputan para estar en condiciones de poder desvirtuarlos en la audiencia del juicio oral, situación que se configuró en la especie, toda vez que en primer término se tuvieron por ciertas respecto del encartado las mismas conductas que fueron objeto de imputación fiscal, refiriéndose además la participación que en dicho accionar tuvo Cristián Mauricio Ortega González.

Además, es dable señalar que el principio de congruencia legal que obliga a los jueces a no excederse de los términos de la acusación ni a condenar por hechos o circunstancias no contenidas en ella, tiene como fin evitar la indefensión del acusado, lo que se traduce en el necesario conocimiento del justiciable de los presupuestos fácticos por los que se le acusa como también de la prueba con que se pretende acreditarlos y, en consecuencia obliga al órgano persecutor a realizar una descripción clara, específica y detallada de la conducta imputada, la cual no puede alterarse, sin perjuicio de la facultad del tribunal de recalificar los (mismos) hechos de una forma distinta previo cumplimiento de las formalidades que prevé el artículo 341 del Código Procesal Penal.

De este modo, no toda modificación genera indefensión y, como ha sostenido la Excma. Corte Suprema *“la congruencia no es sinónimo de*



identidad gramatical”, puesto que necesariamente debe existir relevancia entre la variación de la propuesta incriminatoria con la asentada por el tribunal, esto es, que tal modificación traiga como resultado la indefensión del acusado, es decir, que su desconocimiento se traduzca en el impedimento de presentar una defensa adecuada, ya sea generando elementos probatorios a su favor o desvirtuando la prueba vertida en su contra. (SCS Rol N°6247-14 de 14 de mayo de 2014 y Rol N°75.670-2021 de 16 de marzo de 2022).

Así las cosas, los términos propuestos en la acusación y el sustrato fáctico asentado por el tribunal, no difieren diametralmente de las circunstancias descritas en la inculpación, cuyos presupuestos fueron conocidos por la defensa desde el inicio de la investigación, lo que queda de manifiesto al tiempo de levantar una tesis exculpatoria respecto del delito objeto de análisis fundada en razones diversas (infracción de garantías constitucionales y la falta de prueba de participación) y no lo que en esta sede echa en falta, de tal forma que el enjuiciado siempre estuvo en condiciones de defenderse de la imputación en su contra, quien incluso presentó una teoría alternativa a través de su declaración como medio de defensa y ofreció en la oportunidad procesal correspondiente prueba propia, todo lo cual conlleva a rechazar esta cuerda de la exculpación.

Claramente el objeto del correspondiente juicio oral dijo relación con la determinación de la participación del imputado Ortega González, por lo que el análisis que los jueces efectuaron en la motivación décimo quinta, en calidad de autor, en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal -por haber tomado parte en la ejecución del hecho de una manera inmediata y directa-, misma calificación efectuada por el ente persecutor, el que se condice con los hechos por los cuales se le formuló acusación, circunstancia por lo demás reconocida en los presupuestos fácticos que los juzgadores tuvieron por ciertos.

En efecto, la correcta interpretación del alcance del artículo 341 del Código Procesal Penal implica que el *factum* contenido en la acusación fiscal o particular sea trasladado, sin alteración de sus aspectos esenciales a la sentencia, de modo que ningún hecho o acontecimiento que no haya sido delimitado por aquéllas como objeto para el ejercicio de la pretensión punitiva podrá ser utilizado para ser subsumido como elemento constitutivo de la responsabilidad penal. En este sentido, el tribunal no podrá incluir en la relación de los hechos que da por probados elementos fácticos que



sustancialmente varíen la acusación, ni realizar, consecuentemente, la subsunción con ellos.

En este orden de ideas, reiteramos que la acusación fiscal limitó el accionar del Tribunal, en cuanto a la descripción de la conducta atribuida al encartado, como asimismo el contexto espacio temporal en que aquellos habrían acontecido, entendido base sobre el cual deben analizarse los hechos que los sentenciadores tuvieron por ciertos.

En efecto, la concordancia o correspondencia como límite infranqueable a la decisión condenatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 341 del Código Procesal Penal, sólo es exigible respecto de los detalles o antecedentes de mayor relevancia y que permiten sustentar los presupuestos fácticos a la proposición normativa, a partir del proceso de subsunción jurídica, de manera que la concordancia entre acusación y sentencia dija relación con los elementos esenciales de la descripción fáctica, de forma tal que la no inclusión de términos jurídicos o diferencias accesorias y que no alteren el núcleo de la imputación carecen de total relevancia para el asunto en examen.

De lo anterior se desprende tal como se ha afirmado, que los sentenciadores al tiempo de valorar la prueba y tener por ciertos los presupuestos fácticos explicitados con antelación, respetaron a cabalidad el mentado principio de congruencia, previo a que el acusado tuvo conocimiento preciso de los supuestos fácticos que se le imputaron y la acción subsumible dentro de la calificación jurídica propuesta por el ente persecutor, circunstancias que le permitió ejercer adecuadamente su derecho a defensa, en razón a que incluso la calificación de la participación lo fue siempre en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal, independientemente que se ha sostenido por la Corte Suprema en causa Rol N° 502-2009, en sentencia de fecha 31 de marzo de 2009 que: *“No toda infracción determina automáticamente la nulidad del juicio oral y de la sentencia. El carácter sustancial de la infracción supone que la misma comprometa los aspectos esenciales de la garantía y constituya un atentado de tal magnitud que importe un perjuicio al litigante afectado, que conduzca a la ineficacia de la garantía, resultando de ello un desconocimiento del núcleo esencial de ésta, privándola de toda eficacia. La congruencia, en cuanto principio informador del proceso penal, se refiere al sustrato fáctico de la acusación, no a la calificación jurídica, y la concordancia o correspondencia impuesta como límite infranqueable a la decisión condenatoria sólo es exigible entre la acusación y la sentencia, de manera que las ambigüedades*



que a juicio del recurrente presentan la formalización y reformalización, carecen de relevancia para el asunto en examen". Asimismo, la Corte Suprema en causa Rol N° 6247-2014, en sentencia de 14 de mayo de 2014, resolvió que: "la congruencia no es identidad gramatical, es una correspondencia entre los cargos y lo resolutivo del fallo que opera a favor de la defensa, para no ser condenado al margen de los que postula la acusación".

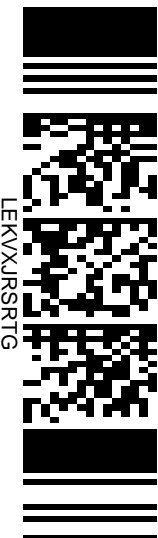
En consecuencia, el principio de congruencia supone la concordancia o correspondencia entre la determinación fáctica del fallo en relación a los hechos y circunstancias penalmente relevantes que han sido objeto de la imputación contenida en la acusación que fueren de importancia para su calificación jurídica. En la especie, es dable concluir que la defensa pudo ejercer válidamente todos los derechos que le consagra la ley, especialmente los que dicen relación con la posibilidad de desvirtuar la prueba de cargo y presentar incluso aquella que fuere de carácter exculpatoria.

CUARTO: Que, en este orden de ideas, se desestimará la causal principal impetrada por la defensa, fundado en el artículo 374 letra f) en relación con el artículo 341 del Código Procesal Penal, no advirtiéndose por tanto falta alguna al principio de congruencia o correspondencia antes analizado.

II.- En cuanto a la primera causal de nulidad impetrada por la defensa, fundado en el artículo 374 letra e) en relación con lo previsto en el artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal:

QUINTO: Que la defensa del encartado invoca en el presente recurso de nulidad, como causal subsidiaria de la anterior, y para el caso que la principal no sea acogida, la contemplada en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 342 c) y el artículo 297 del signado cuerpo normativo.

Expresa que el tribunal, llegó a la conclusión de que ambos imputados actuaron conforme a una coautoría, lo que a criterio de la defensa se entiende que no ha podido ser acreditado por ninguno de los medios probatorios considerados en la sentencia recurrida. En tal sentido, señala que la imputación penal a título de coautoría exige demostrar que en la especie los acusados ejecutaron conjuntamente y de mutuo acuerdo, expreso o tácito el hecho, dividiéndose su realización, en términos tales que dispusieron del codominio del hecho, sobre cuya consumación decidieron en conjunto, porque cada una de las contribuciones, separadamente consideradas, fue funcional a la ejecución del mismo en su totalidad.



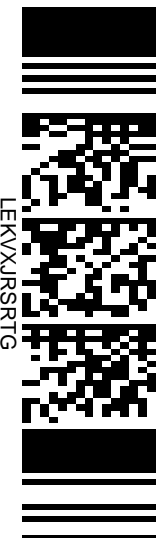
Precisa que es necesario demostrar que existe este acuerdo mutuo, lo que claramente en este fallo no es posible, toda vez que los puntos utilizados por el tribunal para aseverar sus conclusiones, queden exentos de poder entregar algún contenido para poder acreditar esta forma de participación.

Puntualiza que para estos efectos los sentenciadores consideraron principalmente la declaración de la testigo Katherine, señalando: *“En el caso de marras, se ha estimado probable que la versión entregada en un primer momento por la testigo que presenció in situ la agresión de parte de los acusados hacia Gabriel Pasten son aquellas que se corresponden con lo realmente sucedido, esto es, que existió una acción mancomunada de dos de sujetos, a saber, Joshua Núñez y Cristian Ortega que actuaron de manera coordinada ingresando intempestivamente al lugar donde se encontraba el afectado y Katherine Ortega, para luego y sin mediar agresión alguna de parte del occiso, atacarlo en la zona de las extremidades inferiores con cuchillos, causándole diversas lesiones”*. Al respecto la defensa estima que la argumentación entregada en este punto por el tribunal es vaga y no tiene sustento, ya que observando la declaración de la testigo no se puede entender que hubiera existido un acuerdo previo y es más por cuanto los sentenciadores no son precisos en señalar qué parte de lo depuesto por aquélla es usada para corroborar este acápite.

Sostiene que desde su perspectiva se vulnera el principio de razón suficiente, dado que el tribunal dio por establecida la existencia del delito en virtud de una única fuente de prueba no corroborada por antecedentes objetivos y contradicha por toda la prueba expuesta en juicio e incluso por las declaraciones entregadas por ella misma en juicio.

Solicitó se sirva declarar la nulidad del juicio y de la sentencia por la cual fue condenado su representado, ordenando retrotraer la causa al estado de celebrarse una nueva audiencia de juicio oral por Tribunal no inhabilitado al efecto.

SEXTO: Que el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal establece: *“Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados: e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e).* Por su parte, el artículo 342 del mismo Código, en su letra c) señala que: *“Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá: c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones*



LEKXJRSRTG

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”. A su turno, el artículo 297 del citado Código Procesal Penal expresa que *“Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados”*.

“El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo”.

“La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegue la sentencia”.

SÉPTIMO: Que, la impugnación por esta causal dice relación con el entendimiento de la existencia de un vicio producido en el razonamiento probatorio del tribunal, por cuanto según el recurso el tribunal habría infringido -en dicho proceso mental para fundar su convicción condenatoria- los principios lógicos de razón suficiente y de no contradicción.

OCTAVO: Que, a fin de analizar esta causal subsidiaria interpuesta por la defensa, corresponde indicar en primer término que, en las motivaciones décimo tercera, décimo cuarta y décimo quinta y décimo sexta de la sentencia recurrida, los sentenciadores analizaron lata y pormenorizadamente los medios de convicción rendidos en juicio.

NOVENO: Que, se ha sostenido en forma clásica que el principio de razón suficiente fue formulado por Wilhelm Leibniz, quien lo habría elaborado para explicar el fundamento de las *“verdades contingentes”*. Surge la necesidad de diferenciar entre el principio ontológico, según el cual *“tanto el ser, como el acontecer, tiene su razón suficiente”*, del principio lógico, para el cual *“Todo juicio, para ser verdadero, ha menester una razón suficiente”*

“Por ello, hay que ser cuidadosos en su aplicación y limitarse a exigir una ‘mínima actividad probatoria’ que pueda bastar para fundamentar la verdad de un enunciado. No se debe exigir una fundamentación completa que cumpla los más altos estándares de prueba (‘máxima actividad probatoria’), pues con ello nos apartaríamos del principio lógico para adentrarnos en los dominios del principio epistemológico y ontológico de razón suficiente” (Sana crítica, Javier Maturana Baeza, Thomson Reuters, Santiago, 2014, p. 247 y 250)



En efecto, nuestros razonamientos están fundados sobre dos grandes principios: el de contradicción, en virtud del cual juzgamos falso lo que implica contradicción, y verdadero lo que es opuesto o contradictorio a lo falso y el de razón suficiente, en virtud del cual consideramos que no podría hallarse ningún hecho verdadero o existente, ni ninguna enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo.

El principio de razón suficiente nos da respuesta a una exigencia natural de nuestra razón, según la cual nada puede ser "porque sí", pues todo obedece a una razón. En suma, el principio de razón suficiente nos dice: "todo tiene una razón de ser".

Por su parte, don Nelson Pozo Silva, en el texto Razonamiento Judicial, (Librotecnia, Santiago, 2009, p. 273), sin perjuicio de lo señalado, sistematiza este principio del buen razonar dentro de los principios ontológicos, llegando a la máxima de que todo "*conocimiento debe estar suficientemente fundado*". Y cuando cita a Schopenhauer, a propósito de su cuádruple raíz del principio de razón suficiente, uno de esos vértices lo menciona como la "*relación lógica que concatena los juicios del entendimiento*". De manera que, en el proceso intelectual de los jueces durante el razonamiento probatorio, este principio se transforma en una suerte de guía objetiva que lleva al tribunal en su fundamentación desde la prueba rendida a las conclusiones a las que llega producto de las mismas.

Relacionamos tal principio lógico con el mayor énfasis que adquiere la fuerza inferencial precisamente tratándose de la prueba indirecta, pues en el caso de la denominada directa generalmente el tema debatido dice relación solo con la credibilidad de dicha prueba. Pero siempre dentro del ámbito de la libertad probatoria sujeta a los criterios expresados en el artículo 297 del citado del Código Procesal Penal, esto es, dentro del proceso de valoración de la prueba.

Recordemos que de lo que se trata finalmente en un juicio penal es que el tribunal pueda llegar a establecer los hechos en virtud de los cuales se dicta una sentencia condenatoria, capaces de llegar a esa convicción, de modo que los sentenciadores buscan dentro de los elementos probatorios que le aportan los intervinientes verificar si mediante ellos es posible arribar a una conclusión fáctica determinada, más allá de toda duda razonable. Así lo sostiene Ferrer Beltrán (La valoración racional de la prueba, Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 147), que para considerar probada la hipótesis de culpabilidad "*deben darse conjuntamente las siguientes condiciones: 1) La*



hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas. 2) Deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado, excluidas las meras hipótesis ad hoc.”

En este caso, el proceso mental de los jueces para arribar a la convicción de condena se afina en la valoración que se efectúa de dicha prueba, a juicio de la defensa, sin respetar el señalado principio de razón suficiente, al punto que en su concepto la única solución posible sería absolver al acusado en el correspondiente juicio oral.

DÉCIMO: Que, en relación a esta causal es dable señalar que, la Corte Suprema ha señalado qué debemos entender por este principio lógico que rige el pensamiento, en este caso, de los jueces penales. Así, en causa Rol N° 16882-2015, en su considerando décimo tercero, ha indicado: *“Respecto a la desatención de la regla de la lógica de la razón suficiente en la fundamentación de la sentencia, que arguye el arbitrio, dicha regla demanda que cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho debe estar fundamentada en una razón que la acredite suficientemente (SCS Rol N° 21.304-2014 de 5 de mayo 2015), por lo que para postular con éxito la vulneración de esta regla, necesariamente se requiere que el impugnante identifique el hecho cuya existencia ha tenido por demostrado la sentencia -presencia del acusado en el lugar de los hechos, por ejemplo- y que genera la disconformidad de su parte y, luego, que puntualice las afirmaciones o proposiciones con que la sentencia tuvo por probado dicho hecho -por ejemplo, reconocimiento del acusado por un testigo presencial o que el apodo entregado por la testigo del autor corresponde al del acusado- y que no se hayan fundamentadas en una razón que las acredite suficientemente -por ejemplo, que el testigo presencial reconoció a un tercero y no al acusado, o que el apodo del autor aportado por el testigo corresponde a un tercero y no al acusado-, de manera de evidenciar que el hecho dado por acreditado no es compatible con una estructura racional del pensamiento donde el denominado “consecuente” debe hallarse necesaria y estrechamente vinculado con el “antecedente”.*

UNDECIMO: Que, de conformidad a la doctrina expresada por la Corte Suprema, para estar en presencia de una infracción al principio de la razón suficiente, tal como ha sido definido, se requiere que el impugnante:



1° Identifique el hecho cuya existencia ha tenido por demostrada la sentencia.

2° Puntualice los datos externos con que la sentencia tuvo por probado dichos hechos.

3° Señale en forma específica que dicha o dichas proposiciones fácticas no se hayan fundamentado en una razón que las acredite suficientemente, de manera unívoca.

DUODECIMO: Que, en este sentido, si toda *afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho debe estar fundamentada en una razón que la acredite suficientemente*, se ha cumplido en la especie, toda vez que la declaración efectuada por la víctima y los demás testigos en diferentes instancias bajo el cumplimiento y fundamentación en los términos que preceden, aparece provisto de elementos de credibilidad de sus testimonios que se afincan en los parámetros precisados con antelación, no divisándose la ausencia de una razón suficiente para concluir la acreditación del daño moral provocado por el representado del impugnante en el hecho delictual de que se trata, por lo que no se comparte este argumento invalidatorio sostenido por la defensa.

DECIMOTERCERO: Que, en cuanto al principio de no contradicción, de conformidad a la doctrina expresada por la Corte Suprema para estar en presencia de una infracción en el contexto del proceso penal, se requiere que el impugnante:

1° Identifique las proposiciones fácticas que se refieren a escenarios idénticos contenidas en la sentencia.

2° Señale las conclusiones afincadas en una sola de las proposiciones contradictorias, sin embargo, a que llega el tribunal.

Es claramente, en consecuencia, un tema que dice relación con lo argumentado por el tribunal en su sentencia que conduce a la invalidación de su razonamiento, no tratándose de un problema respecto a discrepancias entre la valoración efectuada por el tribunal y la planteada por la defensa, argumento suficiente para desechar también este motivo absoluto de nulidad.

DECIMOCUARTO: Que los razonamientos precedentemente reseñados, independientemente si fueran compartidos o no por la defensa, constituyen reflexiones idóneas que permite entender dentro de la lógica, la convicción de los jueces cuyas conclusiones no desbordan los márgenes entregados por la ley y especialmente las máximas de experiencia, la lógica y los principios científicamente afianzados. La decisión demuestra razón suficiente que no contiene imperfecciones y por lo mismo no es posible



generar una nueva prueba para desvirtuar la convicción a la que arribaron los magistrados que estuvieron presente en la discusión, rendición y observaciones de las acreditaciones que efectuaron los intervinientes sea para demostrar la existencia del delito y su participación, como también desestimar la prueba de descargo.

DECIMOQUINTO: Que, así las cosas, no cabe más que concluir que en el caso en cuestión no se configura la causal de nulidad impetrada -artículo 374 letra e) en relación con lo dispuesto en el artículo 342 letra c) y artículo 297 del Código Procesal Penal-, por lo que se hace forzoso rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la defensa fundada en dicha causal.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 372 y siguientes del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA** el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del imputado Cristián Mauricio Ortega González en contra de la sentencia dictada con fecha veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en causa RUC N° 2200963148-1, RIT N° 266-2023 del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

Redacción de la ministra señora Verónica Sabaj Escudero.

Regístrese y devuélvase.

N° 5035-2023.



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Veronica Cecilia Sabaj E., Ministra Suplente Maria Teresa Quiroz A. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, siete de noviembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a siete de noviembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

